

# SESIONES ORDINARIAS

## 2002

# ORDEN DEL DIA N° 856

### COMISION PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION

Impreso el día 3 de septiembre de 2002

Término del artículo 113: 12 de septiembre de 2002

**SUMARIO:** **Pedido** de informes al Poder Ejecutivo sobre las medidas adoptadas para solucionar los defectos advertidos por el control externo en el cumplimiento de las competencias de control a cargo de los diversos organismos oficiales y cuestiones conexas. (102-S.-2002.)

Buenos Aires, 15 de agosto de 2002.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.*

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente

#### Proyecto de resolución

*El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación*

#### RESUELVEN:

Artículo 1° – Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe con carácter de urgente sobre las medidas adoptadas para solucionar los defectos advertidos por el control externo en el cumplimiento de las competencias de control a cargo de los siguientes organismos: Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Ente Nacional Regulador Nuclear, Dirección Nacional de Transporte Aerocomercial, Organismo de Control de las Concesiones Viales, Comité Federal de Radiodifusión y Comisión Nacional de Correos y Telégrafos, para que con su resultado el Honorable Congreso evalúe las medidas a adoptar en el ejercicio de sus competencias constitucionales, así como la eventual necesidad de solicitar la correspondiente investigación judicial de los extremos concernientes a las responsabilidades relativas al incumplimiento de los deberes que impone la función pública.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.

Saludo a usted muy atentamente.

JUAN C. MAQUEDA.  
*Juan C. Oyarzún.*

#### FUNDAMENTOS

Por las presentes actuaciones se comunica la aprobación de los informes de auditoría referidos a la “sistematización de los informes aprobados por el Colegio de Auditores y la Comisión de Supervisión” relacionados con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Ente Nacional Regulador Nuclear, Dirección Nacional de Transporte Aerocomercial, Organismo de Control de las Concesiones Viales, Comité Federal de Radiodifusión y la Comisión Nacional de Correos y Telégrafos.

El primero de los informes de auditoría consiste en un examen del seguimiento de las observaciones y recomendaciones de los informes de la Auditoría General de la Nación en el seno de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El período auditado en el presente informe de auditoría corresponde de diciembre 1995 a mayo 1998.

El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa de la Auditoría General de la Nación, aprobadas por resolución 45/93 dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156.

Como resultado de estas tareas el informe concluye en que si bien con referencia al seguimiento de recomendaciones, la comisión, en general, ha trabajado de forma tal que evolucionó, no llegó a lograr un control eficiente y eficaz de la totalidad de su tarea. Con lo cual sería necesario que tomara medidas en especial con referencia a los siguientes temas:

a) Que los concesionarios ferroviarios cumplan en su totalidad con lo que se comprometieron en los respectivos contratos, destacándose en particular lo relativo a los sistemas de comunicaciones;

b) Que se implemente un marco reglamentario en materia de consumo de alcohol y drogas a fin de su aplicación en el examen psicofísico de conductores;

c) Que la comisión aplique un mayor número de sanciones en materia de irregularidades que surjan de los reclamos y quejas de los usuarios; y

d) Que las quejas de los usuarios tengan un trámite sin dilaciones.

La siguiente auditoría tuvo por objeto los controles ejercidos en las centrales nucleares. En tal sentido se dirigió a verificar los controles ejercidos por el ex Ente Nacional Regulador Nuclear, actualmente Autoridad Regulatoria Nuclear, en la operación de las instalaciones radiactivas relevantes centrales nucleares Atucha I y Embalse.

El período auditado corresponde a los controles realizados durante el año 1995 y primer semestre del año 1996.

En relación a los ejercicios de aplicación del plan de emergencia exigidos por las licencias de operación de las centrales nucleares objeto de examen, la auditoría, en razón de la especialidad en la materia, se hizo eco de las conclusiones y recomendaciones formuladas por el ente en los respectivos informes de actuación, respecto de las fallas técnico-operativas verificadas.

Señaló, asimismo, que corresponde extremar los recaudos para que los futuros simulacros de emergencia sean organizados con estricto cumplimiento de las pautas establecidas en las respectivas licencias (requerimientos RQ-16/84 y 27/92) y en el requerimiento RQ-222/95, que la previsión de incluir los aspectos externos, exige del ENREN, instar a la entidad responsable a celebrar los acuerdos con las autoridades públicas pertinentes, a fin de que el director de la central detente, en forma temporaria, la autoridad necesaria para la conducción de la emergencia externa y la implementación de las contramedidas de aplicación automática, conforme lo prevé el RQ-222/95 y que, respecto a los informes elaborados como reseña de lo actuado en los simulacros de emergencia, correspondería viabilizar la implementación de una estructura temática uniforme ajustada a la sistematización establecida en el requerimiento RQ-222/95.

Por otra parte particulariza en que los incumplimientos verificados por el ENREN en las condiciones fijadas en las licencias, a los requerimientos regulatorios emitidos y a las convenciones internacionales sobre los sistemas de salvaguardias deben ser sancionados en el marco de un régimen, que resguardando el debido proceso adjetivo, gradúe la sanción a aplicar, conforme a la gravedad y reiteración de los desvíos cometidos por el operador de las centrales nucleares. Desde ese punto de vista

resulta necesario que la autoridad regulatoria, agilice el trámite de aprobación del proyecto del régimen sancionatorio en estudio ya que su omisión desvirtúa la efectividad de los controles en la materia.

La falta de un régimen que regule la graduación de la sanción en función de la gravedad de los hechos, debilita la competencia de control y fiscalización del ente para exigir la corrección de desvíos detectados en el cumplimiento de las licencias, así también la falta de dicho régimen sancionatorio va en detrimento de los compromisos asumidos en el ámbito internacional a través de la aplicación de los sistemas de salvaguardias.

La recomendación formulada al ENREN (actualmente Autoridad Regulatoria Nuclear) de agilizar los trámites de aprobación del proyecto del régimen sancionatorio elaborado, se condice con el imperativo fijado por la Ley Nacional de Actividad Nuclear 24.804 de: "... Establecer los procedimientos para la aplicación de sanciones que correspondan por la violación de normas que dicte en el ejercicio de su competencia ..." (artículo 16, inciso h), y la declaración de privatizar la actividad de generación nucleoelectrónica (artículo 36 de la ley).

La auditoría que corre a continuación tiene por objeto el seguimiento de las observaciones y recomendaciones efectuadas a la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, Fluvial y Marítimo mediante las auditorías practicadas al 31-12-97, a efectos de constatar la corrección de las deficiencias detectadas.

A la fecha de informe, el órgano de control de los servicios aerocomerciales había sido estructuralmente modificado, estando ya la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, Fluvial y Marítimo a cargo de esa función a través del Grupo de Trabajo de Coordinación de Inspecciones y la DNTA.

La Auditoría General de la Nación, extrajo las siguientes conclusiones del análisis abordado a través de los procedimientos practicados:

– Se constataron mejoras en lo concerniente a la estructura organizativa del organismo de contralor, a través de la creación del Grupo de Coordinación de Inspecciones (GTIC) coordinado por un funcionario designado al efecto. No obstante, la carencia de un manual de procedimientos para la práctica de las acciones asignadas a los inspectores constituye otro aspecto a resolver por parte del GTIC. Se señala que la metodología adoptada por el GTIC para la comunicación de los resultados de las inspecciones, consistente en la redacción de informes, no fue aplicada en el caso de las realizadas en el aeropuerto de Córdoba.

– En cuando al sistema de atención de reclamos se evidenciaron importantes mejoras, pero la falta de un registro general de los reclamos recibidos a través de las vías alternativas existentes dispersa el seguimiento eficiente de los mismos.

– Se observó la no aplicación por parte de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, Fluvial y

Marítimo, de las sanciones reguladas mediante el régimen vigente, a las empresas que han incumplido los programas de vuelos aprobados.

– Como resultado del control implementado en torno a la vigencia de las pólizas de seguros por parte de la Dirección Nacional de Transporte Aerocomercial (DNTA), se constató que dicha dirección incurre en demoras en emitir las correspondientes disposiciones de suspensión de las autorizaciones para la prestación de servicios en caso de vencimiento de los seguros.

El siguiente estudio tuvo por objeto el seguimiento de las auditorías realizadas por la Auditoría General de la Nación en el Órgano de Control de Concesiones Viales en el período comprendido entre el mes de diciembre de 1994 y diciembre de 1997.

Como resultado de la tarea realizada, la AGN señala que en materia de reclamos se han tenido en cuenta parcialmente las recomendaciones formuladas por dicho organismo, sin perjuicio de ello persiste la necesidad de:

– Establecer mejoras en la red de comunicaciones internas adoptando una metodología de trabajo que incluya, normas y procedimientos por escrito en referencia al tratamiento de reclamos, además las circulares, resoluciones e instructivos emitidos.

– Adoptar un criterio uniforme en el registro, implementando un sistema computarizado que incluya número de corredor, ruta y tramo, respuesta del usuario y medidas adoptadas. Utilizar el sistema informático en todos los aspectos del tratamiento de reclamos, que permita efectuar un seguimiento integral de los mismos.

– Sería conveniente que a partir de los análisis que efectúa el ente eleve propuestas a fin de brindar mejoras tanto a los concesionarios como a los usuarios.

– Procesar la totalidad de las quejas, realizadas por los usuarios.

– Sería conveniente que se establezca un criterio de muestreo a fin de confirmar si el usuario es notificado acerca de la queja que dio origen a su reclamo.

Más importante aun resultan las referencias a la cuestión de las tarifas. Al respecto la AGN señala lo siguiente:

Se ha detectado un error en el traslado de la tasa Libo para el cálculo de las tarifas (\$ 700.000 anuales aproximadamente, conf. Actuación 726/97).

No se confecciona un expediente administrativo propio con cada ajuste tarifario que se efectúa se mantiene copia de las actuaciones del expediente que sobre el tema tarifas se origina en MEyOSP.

No existe normativa por escrito detallando el procedimiento a seguir con cada actuación a fin de ejercer el control en su aplicación.

El OCCV mantiene y respalda el criterio utilizado por los concesionarios en el cálculo de tarifas, por

entender que los concesionarios no recaudan más ya que los excedentes monetarios disminuyen en igual proporción la tarifa.

Además considera que el incorrecto traslado de la tasa no sería de \$ 700.000 si no de \$ 511.000.

La auditoría sin embargo, señala que ha comprobado que el cálculo resultante de la aplicación errónea de la tasa generadora de excedentes no se contrabalancea con la disminución de la compensación indemnizatoria, si la misma es actualizada con el mismo error detectado en el traslado de la tasa aplicable a la tarifa.

Además se minimiza el efecto multiplicador del error, desconociendo el aumento tarifario del 29-8-96, habida cuenta que el OCCV efectúa su descargo en diciembre del mismo año.

El citado órgano procede a trasladar las solicitudes al concedente sin efectuar ningún tipo de análisis. El mismo la efectúa mediante una nota en la cual únicamente menciona que de acuerdo con su criterio, no corresponde el aumento.

Atento a esto, la Auditoría General de la Nación, concluye en que:

– Se recomienda corregir el error detectado en el traslado de la tasa Libo en el cálculo de las tarifas.

– La corrección debería implementarse a través de la reducción del monto de las compensaciones.

– Confeccionar un expediente administrativo propio con cada ajuste.

– Mantener copia de las actuaciones del expediente que sobre el tema tarifas se origina en el MEyOSP.

– Elaborar normativa por escrito detallando el procedimiento a seguir con cada actuación a fin de ejercer el control en su aplicación (C.Obs.4.B.1.).

Por ello, mantiene las observaciones y recomendaciones planteadas oportunamente.

La última de las auditorías tiene por objeto el seguimiento de las actuaciones AGN 155/95 y 142/95, referidas a los controles aplicados por el COMFER a las emisiones prestadas por las estaciones de radiodifusión sonora con modulación de amplitud (AM) y con modulación de frecuencia (FM). Y a la verificación del ejercicio de su competencia en materia de asignación, adjudicación y habilitación del servicio de radiodifusión para tales frecuencias, respectivamente y comprende la totalidad del año 1997.

Como resultado de la auditoría de seguimiento realizada respecto de las actuaciones AGN 155/95 y 142/95, se constató la persistencia de ciertas deficiencias oportunamente observadas.

En este orden de ideas, resulta posible mencionarse la carencia de manuales de procedimiento; el universo acotado de emisoras de FM ubicadas en el Gran Buenos Aires que son fiscalizadas; las demoras registradas en la tramitación de los expedientes referidos a la asignación, adjudicación y habilitación de frecuencias del servicio de radiodifusión sonora en AM y FM; y el desorden de la documentación incorporada en los mismos.

Respecto del caso particular de las demoras, debe señalarse que si bien se ha reducido el tiempo de tramitación, la implementación de mejoras tendientes a lograr la mayor eficiencia de los circuitos operativos contribuirían en mucho a la minimización de dichos plazos.

Por otra parte, se ha señalado la conveniencia de acelerar los tiempos actualmente insumidos en la instalación del sistema informático, puesto que se entiende que de este modo se lograría un mejoramiento global del desempeño de las tareas que debe desarrollar el organismo.

Finalmente, la adopción de las medidas que las autoridades del COMFER consideren convenientes para la corrección de las debilidades observadas, deberían en todos los casos apuntar a optimizar los estándares de eficiencia y eficacia en el ejercicio de las tareas de contralor que le son propias.

Los informes referidos implican, por una parte, serios incumplimientos en el desempeño de las competencias de los órganos de control. Algunos de ellos implican serios riesgos, bastando citar como ejemplo a los defectos del régimen relativo a la seguridad en materia de plantas nucleares. Otras implican una débil protección a los intereses de los usuarios, así las reiteradas falencias detectadas en los sistemas de tratamiento de reclamos que formulan. Asimismo, se verifican situaciones en las que puede encontrarse comprometido el patrimonio del Estado, como en el caso de las diferencias acusadas respecto al régimen tarifario en la última de las auditorías referidas.

En segundo lugar debe tenerse en cuenta que las actuaciones de que se trata dan cuenta de verificaciones correspondientes al cumplimiento de señalamientos ya efectuados con anterioridad por el control externo, lo que evidencia una desatención a las llamadas de atención relativas a las necesidades de mejora.

Atento lo expuesto corresponde solicitar al Poder Ejecutivo nacional informe con carácter urgente sobre las medidas adoptadas para solucionar los defectos advertidos por el control externo en el cumplimiento de las competencias de control a cargo de los siguientes organismos: Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Ente Nacional Regulador Nuclear, Dirección Nacional de Transporte Aerocomercial, Organo de Control de las Concesiones Viales, Comité Federal de Radiodifusión y Comisión Nacional de Correos y Telégrafos, para que con su resultado el Honorable Congreso evalúe las medidas a adoptar en el ejercicio de sus competencias constitucionales, así como la eventual necesidad de solicitar la correspondiente investigación judicial de los extremos concernientes a las responsabilidades relativas al incumplimiento de los deberes que impone la función pública.

*Oscar S. Lamberto. – Miguel A. Pichetto. – Gerardo R. Morales. – Carlos T. Alesandri. – Omar E. Becerra. – Ricardo C. Quintela.*

## ANTECEDENTES

### 1

#### Dictamen de comisión

*Honorable Congreso:*

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, ha considerado el expediente Oficiales Varios 118/2000, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre “sistematización de los informes aprobados por el Colegio de Auditores y la Comisión de Supervisión” en el ámbito de los siguientes organismos: Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Ente Nacional Regulador Nuclear, Dirección Nacional de Transporte Aerocomercial, Organo de Control de las Concesiones Viales, Comité Federal de Radiodifusión y Comisión Nacional de Correos y Telégrafos y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente

#### Proyecto de resolución

*El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación*

RESUELVEN:

Artículo 1° – Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe con carácter de urgente sobre las medidas adoptadas para solucionar los defectos advertidos por el control externo en el cumplimiento de las competencias de control a cargo de los siguientes organismos: Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Ente Nacional Regulador Nuclear, Dirección Nacional de Transporte Aerocomercial, Organo de Control de las Concesiones Viales, Comité Federal de Radiodifusión y Comisión Nacional de Correos y Telégrafos, para que con su resultado el Honorable Congreso evalúe las medidas a adoptar en el ejercicio de sus competencias constitucionales, así como la eventual necesidad de solicitar la correspondiente investigación judicial de los extremos concernientes a las responsabilidades relativas al incumplimiento de los deberes que impone la función pública.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.\*

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 10 de julio de 2002.

*Oscar S. Lamberto. – Jesús Rodríguez. – Miguel A. Pichetto. – Gerardo R. Morales. – Carlos T. Alesandri. – Omar E. Becerra. – Ricardo C. Quintela.*

### 2

Ver expediente 102-S.-2002.

\* Los fundamentos corresponden a los publicados con la comunicación del Honorable Senado.